

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE TRÁMITE Y FALLO

El seis (06) de mayo de dos mil veintiuno (2021), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, se constituyó en audiencia con el fin de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **SANTIAGO GUEVARA ORDOÑEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-011-2017-000875-01.

AUTO

Se observa a folio 216, escrito mediante el cual, la abogada Dra. SUSANA CORREA ACEBEDO renuncia al poder para representar los intereses de PORVENIR S.A. y conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal y memorial que se allegan al plenario a folios 213 a 215 se reconoce personería para continuar representando los intereses de esta sociedad a la abogada JACQUELINE RODRÍGUEZ ROJAS portadora de la T.P. 305.950 del C. S. de la Judicatura como apoderada principal.

El Magistrado del conocimiento, **Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES**, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

El demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la nulidad de la afiliación al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación

definida (en adelante RPM) administrado por COLPENSIONES, además de condene a la AFP demandada a la indemnización de los perjuicios causados con el traslado de régimen.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata el actor que estando afiliado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (en adelante ISS), hoy COLPENSIONES, y posteriormente se trasladó a PORVENIR S.A.

Asegura que la afiliación a PORVENIR S.A. no fue libre y voluntaria y fue un acto que desde el inicio estuvo viciado por error en el objeto, no solo por la falta de información veraz y suficiente que le hubiere permitido sopesar las ventajas y desventajas sino además por el engaño en que se vio subsumido por el asesor de la AFP.

Afirma que en la asesoría de Porvenir no le suministró información suficiente, adecuada, comprensible y cierta para el traslado, no se le hizo un estudio previo individual concreto sobre las ventajas y desventajas del traslado, no se le explicaron las diferencias entre regímenes, las modalidades de pensión.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo* despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado del demandante al RAIS y condenando en consecuencia a la AFP PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los valores de la cuenta de ahorro individual del actor, incluidos los aportes, rendimientos y cuotas de administración y a COLPENSIONES a recibir dichos dineros y a reactivar la afiliación del demandante en el RPM.

Finalmente condenó en costas procesales a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES por haber resultado vencidas en el proceso.

Para fulminar la condena, el *a quo*, argumentó que, existe una línea jurisprudencia pacífica al señalar que la selección y afiliación a un régimen debe contar con la información plena y ser libre y voluntaria por el afiliado so pena de declarar la ineficacia de la afiliación.

Señaló que las AFP deben brindar a los asegurados una información completa, clara, precisa y veraz, desde la misma fundación de estas entidades, donde se le informe los beneficios, desventajas e implicaciones de los dos regímenes del sistema general

de pensiones y las consecuencias del traslado, así como la viabilidad de este, para no ver afectado su derecho pensional. Teniendo en cuenta el material probatorio, no se encuentra que la demandada haya desplegado conductas para desvirtuar lo afirmado por el demandante, pues no se allegaron al plenario prueba que indiquen que cumplieron cabalmente con la obligación que les impone la ley, solo se limitaron a negar lo afirmado en la demanda, sumado a que en el auto admisorio, fueron requeridas para que aportaran al momento de descorrer el traslado, todas las pruebas que tuvieran en su poder y guardaran relación con el objeto de controversia.

Ordenó el traslado de la totalidad de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante incluyendo los rendimientos y cuotas de administración, es decir todos los dineros que hubiere recibido como consecutiva de la afiliación, pues fueron financiados por el aporte del afiliado y de su propio patrimonio por el deterioro del bien administrado.

Finalmente argumentó el juez, que la acción de traslado de régimen es imprescriptible por estar ligado al derecho pensional y condenó en costas procesales a PORVENIR S.A. y COLPENSIONES por haber resultado vencidas en el juicio y oponerse a la prosperidad de las pretensiones.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN.

La apoderada judicial de **PORVENIR S.A.** recurre la sentencia de primera instancia, indicando no estar de acuerdo con la decisión del juez de declarar la ineficacia del traslado pues al demandante se le informó el alcance del paso que iba a dar y en la prueba documental se acredita que firmó y tomó la decisión de manera libre y voluntaria.

Alega que se le está endilgando a Porvenir una obligación que no era vigente para la época, además para el momento en que se afilió podría haberle convenido al actor estar en el RAIS y no puede decir 20 años después que no le conviene.

En cuanto a las cuotas de administración, señaló que como lo preceptúa el artículo 20 de la ley 100 de 1993, estos dineros se descuentan en razón de la norma y se está desconociendo que en estos 20 años se le cubrieron al demandante los riesgos de vejez, pero también invalidez y muerte y en caso de que sen hubiere producido

alguno de estos riesgos Porvenir habría tenido que reconocer las prestaciones que se derivan.

Adujo que si bien el artículo 1746 del CC se refiere al detrimento, en el caso del demandante se le ha producido un rendimiento de casi el doble de los aportes por lo que se demuestra que efectivamente no hubo deterioro de la cosa administrada, se están devolviendo unos rendimientos que no se hubieran causado en el RPM.

Aduce que en cuanto a las costas del proceso, es de tener en cuenta que la AFP no retuvo al demandante por mero capricho se basó en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 en donde el demandante se ve inmerso en la prohibición y al no haber hecho uso de sus derechos antes de estar inmerso en ella fue negligente.

Por su parte el apoderado de **COLPENSIONES** apela la sentencia, solicitando se revoque la condena en costas en su contra, pues considera que en este caso se evidencia que la litis giró en torno a la ineficacia de la afiliación en la que no tuvo injerencia Colpensiones ni tuvo responsabilidad en la iniciación del proceso.

Señaló que si bien se presentaron excepciones, se hizo en uso del derecho de defensa y aunque negó el traslado de régimen lo hizo fundado en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 por faltar al actor menos de 10 años para pensionarse.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar, COLPENSIONES y el DEMANDANTE. presentaron oportunamente alegaciones en los siguientes términos:

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

COLPENSIONES argumenta resumidamente en los aletos, que en el presente proceso, no es posible declarar la configuración de la ineficacia de la afiliación al RAIS, por tanto se puede extractar que en la prueba documental no existe referencia alguna que distorsione la voluntad de la parte demandante y que prueben la falta de información del fondo privado, ahora bien en el interrogatorio de parte se pudo concluir que el móvil principal de la parte demandante para promover la presente demanda ordinaria laboral, es la cuantía de la prestación de vejez, supuesto que no puede considerarse suficiente para configurar la ineficacia de la afiliación pues el lbc, variable ahorro, variable personas a cargo, expectativas de ahorro y demás

parámetros económicos que determinan la cuantía de la pensión de vejez en el RAIS no podían estar presentes en el momento EXACTO de la vinculación por lo que el asesor del fondo privado estaba en la imposibilidad de avizorar el futuro prestacional del afiliado y por ende, no podemos exigirle un conocimiento que tiene carácter aleatorio e incierto, después de todo este interregno de tiempo.

Hasta el año 2016, los fondos privados cuentan exclusivamente con el consentimiento vertido en el formulario de afiliación, para probar el conocimiento del afiliado respecto del traslado, por cuanto las leyes que surgieron entre el año 1994 y 2016 no exigían nada diferente al documento de afiliación donde constaba la plena intención de pertenecer al Régimen de ahorro individual con solidaridad, por tanto imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye un imposible jurídico, además de quebrantar indubitadamente el principio de confianza legítima.

Bajo este entendido, es necesario aclarar que para que la “voluntad” se vea afectada, debe demostrarse la existencia de un vicio o fuerza capaz de anular el acto jurídico, y estos elementos evidentemente solo los puede aportar el demandante por lo que no puede predicarse que la ineficacia de la afiliación está configurada en el presente proceso.

En razón a lo anterior, se debe tener presente lo mencionado por la honorable Corte Constitucional en Sentencia C - 086 de 2016, providencia en la cual se declaró exequible el artículo 167 del CGP en relación a la carga dinámica de la prueba, precisando que esta figura jurídica puede ser aplicada por el juez, luego de examinar las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el legislador ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba, situación que no se está teniendo en cuenta en este tipo de asuntos pues se ha vuelto de carácter general la inversión probatoria, ocasionando que la parte demandante no tenga obligación alguna de probar fehacientemente los dichos que plasma en el libelo demandatorio.

Ahora bien, en el evento en que su señoría considere que se debe confirmar el fallo de primera instancia, se debe tener en cuenta que los decretos correspondientes al año 1994 (Decreto 692 de 1994), fundantes de los parámetros que direccionan el actuar de los fondos privados, otorgan responsabilidades exclusivamente a cargo del fondo y no de Colpensiones, es por esto que es necesario cambiar el esquema de responsabilidad que indilga la carga económica en un 100% a mi representada, pues

esta directriz transgrede directamente el principio de sostenibilidad financiera, legalidad y confianza legítima del sistema, pues mi representada no tiene la obligación de soportar cargas que fueron creadas por la desatención de las obligaciones del fondo privado, es por esto que el pago de la prestación debe estar a cargo en un 100% del fondo privado, bajo los parámetros que caracterizan al régimen de prima media con prestación definida o en su defecto, se deberá recalcular los valores a transferir de tal manera que se cubra en su totalidad el monto de la prestación reconocida en el régimen de prima media.

Respecto a la condena en costas procesales, solicito no aplicar objetivamente el artículo 365 del CGP pues Colpensiones es un sujeto exógeno a este litigio, por tanto no incurrió en la desatención de sus obligaciones para ocasionar el mismo, además de esto, se debe tener en cuenta el numeral 8 del mencionado artículo, en el cual se aduce: “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, por lo que faculta al operador jurídico a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustrada sus pretensiones procesales, pues de confirmar esta condena, se estaría generando una descapitalización infundada de mi representada además de trasgredir el principio de sostenibilidad financiera preceptuado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

5. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER.

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación del demandante al régimen pensional de ahorro Individual con solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones, se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por el demandante. Igualmente se decidiría si la condena en costas que le fue impuesta a COLPENSIONES se ajusta a derecho.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y CONSULTA de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de las partes, se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Para resolver la apelación, es necesario manifestar, primeramente, que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado del demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el

decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)

2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente caso, está probado, que el accionante estando afiliado al régimen pensional de prima media del ISS, decidió trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por PORVENIR S.A. el 1º de julio de 1995, conforme se demuestra con el documento SIAF que obra a folios 88 del expediente y se informa en la demandada.

De otra parte, en este caso, si bien el actor no es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1º de abril de 1994 con 40 o más años de edad, ello no es óbice para que la AFP PORVENIR S.A. en el año 1995 que el demandante se trasladó al RAIS, estuviera obligada suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo en puntos neurálgicos como era **cómo alcanzaría la pensión de vejez en el RAIS y de que dependería su monto.**

Así mismo, sobre el punto de la debida asesoría, escuchado el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, el cual se encuentra grabado a partir 1 hora y 25 minutos en el disco compacto que milita a folio 199, no se advierte que este haya confesado que la demandada PORVENIR S.A., le haya brindado la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su traslado al RAIS, sobre todo en un punto neurálgico como era **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de que dependería su monto**, lo que genera que la elección de trasladarse al RAIS adolezca de las características de libre y voluntaria que exige el artículo 13 de la ley 100 de 1993 para que el acto jurídico de traslado nazca a la vida jurídica, pues no se cumple con la condición especial exigida por la norma en los casos de afiliación a un

régimen pensional de que sea libre y voluntaria, entendiendo como un componente esencial para que así sea que se brinde la información completa y suficiente sobre cada uno de los aspectos neurálgicos de los regímenes y sobre la situación pensional particular del afiliado.

Ahora, para probar dicha asesoría, contrario a lo dicho por la apoderada de Porvenir en el recurso de apelación, no basta la firma del formulario con la inscripción preimpresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual como ya se ha dicho en esta sentencia, no se probó siendo carga de la parte demandada, como ya lo ha establecido la jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia.

Conforme lo explicado en precedencia, concluye la Sala que la AFP demandada, no le brindó o por lo menos no probó en este proceso siendo su carga, haberle brindado al actor la debida asesoría para tomar la decisión de trasladarse de régimen pensional, sobre todo se repite en un punto determinante, referido a **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué factores dependería su monto**, lo que conlleva a que se deba CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional del actor, aclarando que aunque lo solicitado fue la nulidad, como se explica por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias atrás referidas, lo procedente jurídicamente es declarar la ineficacia del traslado, pues a pesar que la figura jurídica de la nulidad presenta algunas similitudes con la de la ineficacia, en el fondo son disímiles.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por COLPENSIONES al dar respuesta a la demanda, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la SCL de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019 con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Ahora, referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES por parte de PORVENIR S.A., punto que fue objeto de apelación por la apoderada de esta sociedad, encuentra la Sala que la orden impartida por la *a quo*, de trasladar a

Colpensiones todos los valores de la cuenta de ahorro individual de la actora incluidos los rendimientos, sumas adicionales de la aseguradora y cuotas de administración debe confirmarse, pues dicha devolución de dineros debe incluir no solo el saldo existente en la cuenta de ahorro individual de la actora al momento de dar cumplimiento a la sentencia con sus intereses, sino también la totalidad de los aportes pensionales que hubieren recibido las AFP a las que estuvo afiliada, incluidos, contrario a lo afirmado por la recurrente, los porcentajes destinados a cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora, es decir, el 100% de la cotización, con sus rendimientos y sin descuento de ninguna índole, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación, es decir ningún efecto jurídico puede derivarse de este y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, pues como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando que la Sala Civil de la alta Corporación, igualmente ha afirmado que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En esos términos al haberse declarado la ineficacia de la afiliación, deberán devolverse la totalidad de los dineros aportados, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019).

En relación con las costas procesales apeladas por la apoderada de PORVENIR S.A., su apelación se basa en que no podían impedir la iniciación de este proceso

judicial por cuanto el demandante se encontraba inmerso en la prohibición de traslado por faltarle menos de 10 años para pensionarse y que por tal razón no le retuvo intencionalmente, argumento que no resulta suficiente para negar su imposición, pues la condena en costas debe ordenarse en contra de quien resulte vencido en el juicio, máxime cuando fue Porvenir con su actuar quien dio pie a que se declarara la ineficacia de la afiliación y en segundo lugar porque la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993, se aplica en los casos de traslado voluntario, que no es lo que pretende la actora, sino la ineficacia de su afiliación inicial al RAIS.

En cuanto a la condena en COSTAS a cargo de COLPENSIONES, en atención a que no tuvo ninguna responsabilidad en el traslado de régimen pensional de la demandante puesto que no era su obligación prestar la información debida al momento de la afiliación al RAIS y por lo tanto su convocatoria al proceso fue solo para que corrieran con las consecuencias de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en el que no participó, razón por la que no tiene que asumir costas procesales.

De acuerdo con lo anterior se revocará la condena en costas que le fue impuesta a COLPENSIONES, quedando dicha condena únicamente a cargo de PORVENIR S.A. por haber resultado vencida en el juicio y por haber sido esta sociedad la que con su actuar generó la ineficacia declarada.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y consultada será CONFIRMADA y REVOCADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS a favor del demandante y a cargo de PORVENIR S.A., por haber sido vencida en el recurso de apelación.

Las agencias en derecho conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$908.526.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de mayo de 2019 proferida por el JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **SANTIAGO GUEVARA ORDOÑEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-** y la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** en cuanto declaró la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS.

SEGUNDO: REVOCAR la condena en COSTAS proferida en primera instancia en contra de COLPENSIONES. para en su lugar absolverlas de tal condena e indicar que las costas en primera instancia correrán exclusivamente a cargo de PORVENIR S.A.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a favor del demandante y a cargo de PORVENIR S.A. Las agencias en derecho se fijan en la suma de un \$908.526.

La anterior sentencia se notifica a las partes en ESTADOS.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

FRANCISCO ARANGO TORRES

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **078** del **07 DE MAYO DE 2021**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **287a15ed8a2e4c438bb41414cdadeedb397b0351b13f3d3d05a07ef9cf722a07**

Documento generado en 06/05/2021 01:22:13 PM